



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
TUNJA**

Tunja, trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020)

Medio de control: Reparación directa
Demandante: Javier Hernando Rodríguez Castelblanco
Demandado: Municipio de Tunja – Empresa Constructora de Vivienda - ECOVIVIENDA
Radicación: 15 0013333004 **2018 00211 00**

I. ASUNTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la admisión de los llamamientos en garantía formulados por la apoderada judicial de la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja – ECOVIVIENDA frente a la Nación- Ministerio de Vivienda, Compañía de Seguros Generales y Compañía Aseguradora de Fianzas S. A Confianza

II. ANTECEDENTES

La apoderada de la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja – ECOVIVIENDA, mediante escrito radicado el 06 de noviembre de 2019 (fs. 1-11 del cuaderno de llamamiento en garantía número 1), solicitó que se llame en garantía a la presente actuación procesal a:

- i) Nación- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- ii) Nacional de Seguros S. A Compañía de Seguros Generales.
- iii) Compañía Aseguradora de Fianzas S. A Confianza.

Como fundamentos normativos de su petición, señaló el artículo 225 del CPACA, así como las normas pertinentes sobre la responsabilidad civil.

III. CONSIDERACIONES

La figura del llamamiento en garantía se encuentra regulada en el artículo 225 del CPACA, en los siguientes términos:

“LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la

citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

- 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
- 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*
- 3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.*
- 4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.*

El llamamiento en garantía con fines de repetición se registrá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen.”

De la norma transcrita se deriva, entonces, que el llamamiento en garantía requiere como elemento esencial, un derecho legal o contractual, conforme al cual el llamado deba correr con las contingencias de la sentencia, que impuso al demandado la obligación de resarcir un perjuicio o a efectuar un pago.

La jurisprudencia de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que, para ordenar el llamamiento en garantía se requiere **prueba siquiera sumaria de la existencia del vínculo legal o contractual de garante**¹, motivo por el cual no basta el cumplimiento de los requisitos formales para que se ordene el llamamiento, porque si bien para que sea procedente basta con la **afirmación** de tener un derecho legal o contractual para exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que se llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que se tuviere que hacer como resultado de la sentencia, esto no quiere decir que en la petición de vinculación no tenga que argumentarse en forma seria y justificada la razón por la cual se llama a un tercero al proceso, pues dicha vinculación no debe ni puede ser caprichosa, además, de que la misma debe ser susceptible de control, con el fin de no incurrir en temeridad al presentarla.²

De otra parte, en virtud de que al escrito contentivo del llamamiento en garantía se le imparte un trámite similar al de la demanda, para efecto de notificar el auto que admita el llamamiento resulta necesario que se aporte el **certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas de derecho privado**, adicionalmente, porque el acto de notificación se surtirá a través de los correos electrónicos indicados por las empresas para tal fin ante la Cámara de Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 291 del CGP.

¹Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 30 de enero de 2017, expediente radicado No: 76001-23-33-000-2014-00208-01 (56903). Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, también, Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Cuarta, auto de 01 de febrero de 2018, expediente radicado No 25000-23-37-000-2014-00390-01 (23041), Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, auto de 01 de noviembre de 2018, expediente radicado No 25000-23-37-000-2017-00033-01(23987), Consejero Ponente Julio Roberto Piza Rodríguez .

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A . auto de 03 de septiembre de septiembre de 2019. Radicado: 20001-23-33-000-2016-00006-01(61498). Consejera Ponente: María Adriana Marín.

IV. CASO CONCRETO

En primer lugar, en lo relativo a la oportunidad se encuentra que el artículo 172 del CPACA dispone que en el término de traslado de la demanda, la entidad demandada deberá contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y en su caso, presentar demanda de reconvención.

En el presente asunto, el término de 30 días de que trata la norma, corrió desde el 04 de octubre y hasta el 19 de noviembre de 2019 (f. 101), y la contestación de la demanda por parte de ECOVIVIENDA se radicó el día 06 de noviembre de 2019 (fs. 112 y s. s), junto a la cual, se elevaron las solicitudes de llamamiento en garantía, es decir, que fueron presentadas oportunamente.

Así las cosas, procede el Despacho a verificar el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales, de los llamamientos en garantía conforme a lo dispuesto en el artículo 225 del CPACA:

Requisito	Ministerio de Vivienda	Compañía de Seguros Generales	Confianza
Identificación del llamado	<u>No cumplió</u> con este requisito en la medida que no señaló el nombre del representante legal del Ministerio de Vivienda.	<u>No cumplió</u> con este requisito en la medida que no señaló el nombre del representante legal de la Compañía de Seguros	<u>No cumplió</u> con este requisito en la medida que no señaló el nombre del representante legal de la Compañía de Seguros
Domicilio	Cumplió en cuanto indicó que es la Carrera 6 No 8-77 de Bogotá	Cumplió en cuanto señaló que es la Calle 94 No 11-30 piso 4 de Bogotá	Cumplió en cuanto señaló que es la Calle 82 No 11-37 piso 7 de Bogotá
Certificado de Existencia y representación legal	N:A	<u>No cumplió</u> con este requisito	<u>No cumplió</u> con este requisito
Dirección de quien hace el llamamiento	Cumplió en la medida que indicó como dirección de notificaciones la carrera 10 No 21-33 piso 3 del Edificio San Francisco Plaza de Tunja (f. 10 del cuaderno de llamamiento)		

Ahora bien, frente a la exigencia plasmada en el numeral 3.º del artículo 225, referente a los **hechos** en que se basa la solicitud expuso los siguientes:

1. Respecto al llamamiento de la **Nación-Ministerio de Vivienda**, manifestó que el señor lader Barrios Hernández como representante del Consorcio La Mejor Vivienda para Tunja, integró la Unión Temporal Torres del Parque y suscribió la escritura pública No 2340 de 03 de diciembre de 2013, correspondiente al apartamento de la señora Fanny Cortes Palacios, demandante en el presente asunto.

Señaló que conforme a la cláusulas séptima y décimo octava del negocio jurídico de constitución de la Unión Temporal Torres del Parque, al Consorcio La Mejor Vivienda para Tunja le asistía el deber de responder solidariamente por cada uno de los compromisos adquiridos por la Unión Temporal y mantener indemne a ECOVIVIENDA contra todo reclamo, demanda y acción legal que pudiera surgir del proceso de construcción de viviendas.

Aseveró que la Nación- Ministerio de Vivienda era una entidad del orden nacional encargada del otorgamiento, tanto de recursos como de subsidios por parte del Ministerio, de manera que en los casos en los que se involucraban recursos de la Nación, conforme a lo dispuesto en la Ley 3ª de 1991, modificada por los Decretos 2190 de 2009 y 1537 de 2012, con ocasión del control de la obra y giro de los mismos, debía vincularse al proceso.

2. Por otra parte, en cuanto a los fundamentos del llamamiento en garantía de las aseguradoras **Nacional de Seguros S. A** **Compañía de Seguros Generales y Compañía Aseguradora de Fianzas S. A** **Confianza**, indicó que el 22 de noviembre de 2010 el municipio de Tunja, la Empresa Constructora de Vivienda ECOVIVIENDA y el Constructor- Consorcio La Mejor Vivienda para Tunja representado legalmente por lader Wilhem Barrios, conformaron la Unión Temporal Torres del Parque, cuyo objeto era la ejecución del proyecto de vivienda de interés prioritario Torres del Parque en el municipio de Tunja.

Manifestó que en la cláusula décimo séptima del documento de constitución de la Unión Temporal, respecto a la constitución de garantías se estableció una garantía única de cumplimiento del contrato, incluyendo los amparos de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado, responsabilidad civil extracontractual y estabilidad y calidad de la obra.

Afirmó que el 26 de enero de 2011, el señor lader Wilhem Barrios Hernández, representante legal del Consorcio La Mejor Vivienda para Tunja, constituyó con la compañía Cóndor S.A., la póliza de seguro de cumplimiento de contrato estatal No 30015413 a favor del asegurado/beneficiario ECOVIVIENDA.

Indicó que con ocasión del proceso de liquidación de la compañía aseguradora Cóndor S.A., el Gerente de ECOVIVIENDA solicitó al ingeniero lader Wilhem Barrios la sustitución de las pólizas del contrato, y que fue así como el 04 de noviembre de 2014, el constructor del proyecto lader Barrios radicó ante ECOVIVIENDA la **póliza de cumplimiento No 400000556**, correspondiente al Proyecto de Torres del Parque de Tunja, emitida por la aseguradora Nacional de Seguros de Colombia.

Refirió que mediante Resolución No 85 del 18 de noviembre de 2018, el representante legal de ECOVIVIENDA declaró el siniestro de la póliza de

cumplimiento **No 400000556** de la aseguradora Nacional de Seguros, en cuanto al amparo de estabilidad de obra.

Relató que el 07 de diciembre de 2018 ECOVIVIENDA, a través de apoderada judicial, radicó demanda ejecutiva contractual contra la aseguradora Nacional de Seguros S. A Compañía de Seguros Generales, con fundamento en el título ejecutivo consignado en la póliza de seguro de cumplimiento estatal No 400000556.

Por otra parte, señaló que el 25 de enero de 2011, el señor lader Barrios Hernández suscribió con la Compañía de Seguros Condor S. A, póliza de responsabilidad civil extracontractual No 300001891 a favor de ECOVIVIENDA.

Adujo que el 25 de abril de 2013, el señor lader Barrios Hernández suscribió con la Compañía de Seguros Cóndor S. A, la póliza de responsabilidad civil extracontractual No 300002388 a favor de ECOVIVIENDA y, posteriormente, el 01 de diciembre de 2014, constituyó la póliza **No RG024629 Certificado 01 RO048809** de la Aseguradora de Fianzas Confianza, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, a favor del Consorcio La Mejor Vivienda para Tunja.

3. En cuanto a las garantías constituidas por el interventor **William Duvan Avendaño Suárez**, explicó que el 20 de diciembre de 2010 suscribió el contrato No 30 de consultoría con ECOVIVIENDA, para la interventoría del proyecto denominado Torres del Parque.

Precisó que el 20 de diciembre de 2010, el señor William Duvan Avendaño Suárez, en condición de tomador, constituyó la **póliza de seguro No 36GU024353** de la Compañía de Seguros Confianza, a favor de ECOVIVIENDA.

Agregó que mediante Resolución No 75 de 26 de octubre de 2018, el representante legal de ECOVIVIENDA realizó la imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento dentro del contrato de consultoría No 30 de 2010, por lo que a la fecha la Compañía de Seguros Confianza S. A., no había efectuado el desembolso de algunos de los recursos por concepto de los amparos afectados con la póliza de seguro No 36GU024353.

Respecto a la demostración de la **relación legal o contractual** entre ECOVIVIENDA y los llamados en garantía, con sustento en el auto de 09 de febrero de 2016 del Tribunal Administrativo de Boyacá³, aseveró que el operador judicial no podía exigir prueba sumaria de la referida relación, porque con la nueva regulación del llamamiento en garantía previsto en el artículo 225 del CPACA, bastaba la simple afirmación para que se entendiera cumplido dicho requisito, de manera que no aportó copia de los documentos que soporten la solicitud de llamamiento, tales como copias de contrato, convenios y pólizas.

³ Expediente 20147-135, magistrado ponente Fabio Iván Afanador García

Pues bien, en lo que atañe a este último argumento, el Despacho debe señalar que se aparta de la consideración expuesta por la señora apoderada de ECOVIVIENDA, de una parte, porque la providencia en mención no constituye un precedente jurisprudencial⁴ para el caso concreto, en tanto no se estableció la existencia de una semejanza entre los hechos relevantes del caso anterior y de este que se discute, ni que la decisión adoptada en aquel resulte adecuada y razonable para su aplicación en el *sub examine*.

De otro lado, porque puede advertirse que la jurisprudencia del Consejo de Estado no ha sido pacífica en esta materia, pero, en todo caso, ha señalado que la solicitud de llamamiento debe encontrarse argumentada en forma seria y justificada, lo cual exige que se pruebe, al menos, de forma sumaria, la relación legal o contractual⁵.

Así las cosas, a juicio del Despacho, a la entidad demandada corresponde sustentar la solicitud de llamamiento en garantía, con exposición de los hechos en que se basa, y mediante prueba que acredite sumariamente la relación legal o contractual que justifique la intervención en el proceso de **Nacional de Seguros S. A. Compañía de Seguros Generales y Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. Confianza**.

Por último, en cuanto al llamamiento de la **Nación-Ministerio de Vivienda**, se encuentra que la solicitud se efectuó de manera argumentada y razonada, al referirse a las previsiones de la Ley 3ª de 1991⁶, reglamentada por los Decretos 2190 de 2009 y 1537 de 2012, en la medida que las entidades convocadas son administradoras de recursos públicos para la ejecución de la obra que dio origen al presente asunto (f. 3).

Bajo este panorama, el Despacho concluye que no se encuentran reunidos los presupuestos que habilitan la admisión de los llamamientos en garantía, porque respecto a la Nación- Ministerio de Vivienda se omitió señalar el nombre del representante legal del llamado en garantía, y frente a Nacional de Seguros S. A. Compañía de Seguros Generales y Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. Confianza, se omitió indicar el nombre del representante legal del llamado en garantía; adjuntar el certificado de existencia y representación legal de las compañías aseguradoras y allegar prueba sumaria que acredite la relación legal o contractual que justifique su intervención en el proceso.

⁴Corte Constitucional, sentencia T-457 de 2008, M.P: Humberto Sierra Porto, en la que se indicó: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.”

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 30 de enero de 2017, expediente radicado No: 76001-23-33-000-2014-00208-01 (56903), Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, también, Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Cuarta, auto de 01 de febrero de 2018, expediente radicado No 25000-23-37-000-2014-00390-01 (23041), Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, auto de 01 de noviembre de 2018, expediente radicado No 25000-23-37-000-2017-00033-01(23987), Consejero Ponente Julio Roberto Piza Rodríguez

⁶ Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones.

En virtud de lo anterior, el Despacho inadmitirá estos llamamientos en garantía, para que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación del presente auto, la parte interesada subsane las anteriores falencias.

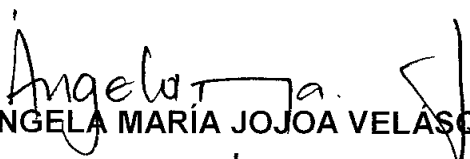
En consecuencia, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja

.RESUELVE

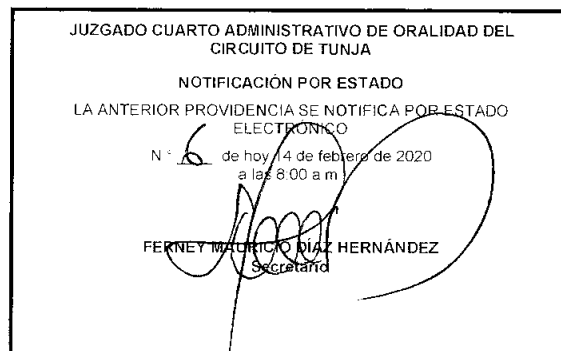
Primero: Inadmitir los llamamientos en garantía formulados por la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja- ECOVIVIENDA frente a la Nación-Ministerio de Vivienda, Nacional de Seguros S. A. Compañía de Seguros Generales y Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. Confianza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Conceder a la parte demandada el término de cinco (5) días, para que proceda a subsanar las solicitudes de llamamiento en garantía, para lo cual deberá allegar la información y los documentos ya señalados.

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

⁷ AMRS



⁷ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 14 de febrero de 2020 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Fernet Mauricio Díaz Hernández – Secretario